

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACION - SENTENCIA	
DEMANDANTE	SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ
DEMANDADO	AFP PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-010-2018-00381-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes, dependencia económica de los padres frente al afiliado fallecido – carga probatoria.
DECISIÓN	Modifica y confirma.

Medellín, seis (6) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por los señores **SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 049**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 21 de septiembre de 2023, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, lo siguiente: El día 6 de octubre de 2007 falleció, por causas de origen común, el señor MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA, hijo de los aquí demandantes SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ, quien era un hombre soltero, sin hijos, además, se encontraba afiliado a la AFP PROTECCIÓN S.A., donde registraba un total de 534.71 semanas cotizadas, dejando así causado el derecho pensional a favor de sus beneficiarios.

Al creer reunidos los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, los aquí demandantes elevaron solicitud pensional ante la AFP PROTECCIÓN S.A., el día 27 de noviembre de 2007, en calidad de padres supérstites del afiliado fallecido, no obstante, dicha prestación les fue negada mediante comunicado del 4 de septiembre de 2008, bajo el argumento de no haberse acreditado el requisito de la dependencia económica al que alude el art. 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003.

Decisión que no comparte la parte demandante, pues ambos padres sí dependían económicamente del afiliado fallecido; este vivía con ellos bajo el mismo techo, al igual que otro hermano de nombre ALDEMAR RESTREPO MOLINA; los reclamantes son personas que no laboran y tampoco reciben renta, pensión o ayudas de ninguna naturaleza, siendo así los únicos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que a los señores SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ les asiste derecho a una pensión de sobrevivientes de origen común en calidad de padres supérstites del afiliado fallecido MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA; en consecuencia, se CONDENE a la AFP PROTECCIÓN S.A., al reconocimiento y pago de esta prestación económica, en forma retroactiva, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

La AFP PROTECCIÓN S.A. dio respuesta oportuna a través de su apoderada judicial (folios 54 al 59 del archivo PDF 001) manifestando, frente a los supuestos fácticos narrados por la activa, que son ciertos aquellos que aluden al fallecimiento del afiliado MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA, así como, la solicitud pensional presentada con ocasión a este insuceso, y la respuesta negativa suministrada a los demandantes producto de la investigación administrativa adelantada por el fondo, donde se pudo constatar que los padres no dependían económicamente del hijo fallecido, por el contrario, se evidenció que el señor ANTONIO DE JESUS RESTREPO tenía ingresos económicos propios derivados de su oficio de reparador de artículos de vidrio, y con ellos garantizaba la subsistencia congrua de su grupo familiar, sin la ayuda o colaboración que le pudiera haber proporcionado su hijo fallecido, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto del debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“FALTA DE CAUSA PARA PEDIR; INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS; BUENA FE; PRESCRIPCIÓN; PAGO; Y COMPENSACIÓN”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, el juez *A Quo* en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 21 de septiembre de 2023, CONDENÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar la pensión mínima de sobrevivientes generada por el fallecimiento de MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA, a sus progenitores SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ, pagándoles un retroactivo pensional generado por la prescripción entre el 30 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2023 equivalente a \$107.161.445, a ser distribuido en un 50% en favor de cada uno de los demandantes, por catorce mesadas anuales.

A partir del 1° de septiembre de 2023 ordenó a la AFP a continuar pagando la mesada mínima en un 50% para cada demandante, sin perjuicio de los incrementos anuales de Ley.

Autorizó a PROTECCIÓN S.A. a descontar del retroactivo con indexación la suma que pagó por devolución de saldos, y los aportes al sistema de seguridad social en salud.

CONDENÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A. a liquidar y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 a partir del 30 de abril de 2014 y hasta la fecha de satisfacción total de la obligación.

DECLARÓ probada parcialmente la excepción de prescripción y probada la excepción de compensación, y finalmente CONDENÓ en costas a PROTECCIÓN S.A. en favor de los demandantes a ser distribuidos en partes iguales entre ellos. Se fijan las agencias en derecho en \$4.000.000.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que ambos reclamantes lograron acreditar la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento del afiliado MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA, relativos a la dependencia económica de los padres frente al hijo fallecido, pues el hecho de que ambos demandantes sean propietarios de un bien inmueble, no significa necesariamente que hayan

logrado una independencia económica, por el contrario, eran necesarios los recursos que proveía el afiliado fallecido, que sumados a los del otro hermano que conformaba el núcleo familiar, permitía solventar las necesidades del hogar, que eran apremiantes pues se trataba de adultos mayores que no lograron consolidar una pensión de vejez.

En relación a la excepción de prescripción, la encontró parcialmente configurada respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 30 de abril de 2014, pues la segunda reclamación pensional se presentó el 30 de abril de 2017, y ese es el punto de partida para contabilizar el término trienal de prescripción.

Acogió la excepción de compensación indexada, al encontrarse acreditado en el plenario que a los aquí demandantes les fue reconocida una devolución de saldos, con ocasión al fallecimiento del afiliado, y finalmente se impartió condena a los intereses moratorios, pues las razones expuestas por el fondo privado para negar la pensión, no resultaron ciertas.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El apoderado judicial de la entidad se opone al reconocimiento pensional, pues considera no haberse acreditado el requisito de la dependencia económica, ello si se tiene en cuenta que la información suministrada en sede administrativa no concuerda con lo dicho en el trámite judicial, concretamente en la repartición de los gastos entre los hermanos hombres integrantes del núcleo familiar.

Aduce que el testigo ALDEMAR RESTREPO MOLINA, decretado de oficio por el despacho, no fue valorado con la suficiente rigurosidad, máxime que fue la persona que acompañó a los demandantes durante el trámite administrativo de reconocimiento pensional.

Respecto al demandante ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ, refiere que trató de ocultar la presencia en núcleo familiar de su otra hija de nombre Adriana

Y los testigos ALDEMAR RESTREPO MOLINA y NESSY DORIETH CANO MEJÍA, fueron contradictorios entre sí, restándole credibilidad a sus dichos, pues el primer de ellos afirmó que su hermano fallecido, había dejado varias deudas de tarjetas de crédito, mientras que la otra declarante, quien se identificó como la novia del finado, expuso todo lo contrario, con el agravante que esta última testigo, muchos de los hechos que dijo conocer, obedecieron a simples comentarios, mas no al haber presenciado en forma personal y directa algunas circunstancias de la vida familiar del causante, pues no tenía mucha cercanía con esta familia.

Solicita, por lo tanto, el recurrente, una nueva valoración de los medios probatorios obrantes en el plenario, y solo en caso de confirmarse el derecho pensional, se desestime la pretensión de intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 por ser improcedente, se revise lo dispuesto frente a la excepción de compensación, pues los montos no concuerdan, y se analice nuevamente el fenómeno jurídico de la prescripción, pues la misma solo se interrumpe por una sola vez, y no como equivocadamente lo entendió el juez de primer grado.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose en la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A. solicita se revoque la sentencia de primera instancia, toda vez que la investigación administrativa realizada por el fondo se refleja una información y los dichos en el proceso otros, además se demostró un interés de ocultar información y que la negativa pensional en su momento era suficientemente razonada, ya que no se demostró una dependencia económica por parte de los demandantes.

Se apela la decisión sobre la prescripción parcial desde el año 2014 y no desde el año 2018, así como el monto a compensar, y las costas, por ceñirse PROTECCIÓN S.A a una correcta valoración de los hechos para negar, así como medio exceptivos idóneos al momento de la defensa.

La parte demandante, también formuló alegatos de segunda instancia; sin embargo, la apoderada judicial que presentó el memorial contentivo de los

misimos Dra. BLANCA LIBIA JIMÉNEZ MESA, no cuenta con personería jurídica para actuar, pues el memorial de sustitución poder allegado al plenario, se hizo a favor de la Dra. Catalina Toro Gómez.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal pasa la Sala a resolver, previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Dependencia económica de los padres frente al hijo fallecido. Teniendo en cuenta el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la demandada, el cual delimita la competencia de la Sala en segunda instancia, la controversia jurídica que debe resolver en esta Sala, consiste en determinar si los señores SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ acreditan o no los requisitos legales para ser considerados beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que reclaman con ocasión al fallecimiento de su hijo afiliado MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA, y en caso afirmativo, determinar la fecha del disfrute pensional, el valor del retroactivo en atención a las excepciones de prescripción y compensación propuestas, así como la procedencia o no de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto la indexación de las condenas.

Procede la Sala a resolver lo pertinente dentro de su competencia, advirtiendo que para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, las disposiciones llamadas a regir el presente asunto son las contenidas en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, que a su vez hace una remisión normativa al artículo 47

ibídem, este último modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, en lo referente a los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes.

Valga la pena advertir que en el presente asunto NO resultan objeto de controversia los hechos relativos a:

-El fallecimiento del afiliado MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA hecho ocurrido día 6 de octubre de 2007, según consta en el registro civil de defunción visible a folios 34 del archivo PDF N° 01.

-La filiación entre los demandantes SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ y el causante MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA según consta en el registro civil de nacimiento visible a folios 33 del archivo PDF N° 01.

-La solicitud pensional elevada por los señores SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ ante la AFP PROTECCIÓN S.A. el día 27 de noviembre de 2007, pero esta les fue negada mediante comunicado del 4 de septiembre de 2008, bajo el argumento de no haberse acreditado el requisito legal de la dependencia económica de los padres respecto al hijo fallecido, allí mismo les fue otorgada una devolución de saldos en cuantía única de \$27.225467 (fls. 21 y 22 del archivo PDF N° 01).

Por lo tanto, procederá la Sala a analizar si en el sub examine quedó satisfecho o no el requisito de la dependencia económica de los demandantes SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ frente al hijo fallecido MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA, conforme lo previsto en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, normativa que establece lo siguiente: **“...a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste...”**., lo anterior al no ser motivo de controversia la causación del derecho pensional como tal, pues en la HISTORIA LABORAL aportada por la AFP PROTECCIÓN S.A., consta la existencia de 639,28 semanas en toda la vida laboral, de las cuales 154 semanas se encontraban cotizadas entre el 6 de octubre de 2004 y el 6 de octubre de 2007 (fls. 93 al 98 del archivo PDF 001).

**LA DEPENDENCIA ECONÓMICA EN PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
EN FAVOR DE PADRES, POR HIJO FALLECIDO.**

Frente al alcance de la dependencia económica, se tiene que la modificación traída por la Ley 797 de 2003, que establecía que la dependencia económica de padres a hijos debía ser total y absoluta, fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional, mediante sentencia **C-111 de 2006**.

La ausencia de una definición legal de la dependencia económica, determinó la necesidad de fijar su alcance por vía jurisprudencial; en este contexto, la jurisprudencia ha identificado un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente a partir de la valoración del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular, lo que ha llevado a concluir que la dependencia no se desvirtúa por el hecho que los padres perciban ingresos por su propio trabajo o recursos de otras fuentes, siempre y cuando éstos no los conviertan en autosuficientes. Así ha quedado expuesto entre otras, en la sentencia T-456 de 2011 que fija reglas para determinar la dependencia económica.

En conclusión, depender económicamente de alguien, supone un criterio de necesidad, un sometimiento o sujeción al auxilio recibido de tal manera útil e imprescindible que, de no obtenerlo, se pondría en peligro la subsistencia del subordinado al no poder sufragar los gastos diarios.

Por su parte la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, ha reseñado respecto a la dependencia económica de los padres, en sentencia con radicación No. 25.069 de 2.006 lo siguiente:

“Este criterio de dependencia económica tal como lo ha concebido la Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación a que se refiere la norma. Sin embargo, resulta claro que sólo puede ser definida en cada caso concreto”.

En materia de pensión de sobrevivientes, ha estimado la jurisprudencia del trabajo que la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres-demandantes y, al demandado, el deber de desvirtuar

esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas. Así lo ha expuesto la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como puede verse entre otras, en la sentencia del 24 de noviembre de 2009, con radicado 36.026, en la cual dejó sentado que:

“Es importante precisar que a la demandante que pretende obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante, es a la que, en principio, le corresponde probar, por cualquier medio de los legalmente autorizados, su dependencia económica del occiso, y cumplido lo anterior, será el demandado quien deberá demostrar dentro de la contienda judicial, la existencia de ingresos o rentas propias de la ascendiente que le permitan ser autosuficiente.”

Y en la sentencia SL15260 de 2017, rad. 56784, La Corte reiteró lo siguiente:

“...La dependencia económica que conforme el criterio jurisprudencial de esta Sala, posibilita el acceso a una pensión de sobrevivientes, debe contar, por lo menos, con tres elementos a saber: que sea cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; que la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacia el presunto beneficiario; y que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste, por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de suerte que si recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia...”

Conforme al criterio jurisprudencial que antecede, resulta claro para la Sala que la entidad de la ayuda económica por la que se reclame la calidad de beneficios padre-hijo en una pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, no se encuentra determinada tanto por el quantum de la misma, sino por la importancia y determinación que esta pueda tener en determinado contexto socio económico y familiar.

CASO CONCRETO.

Ahora bien, del análisis de las razones que motivaron la negativa pensional por parte de la AFP accionada, se encuentra que ésta obedeció a la no demostración del requisito de la DEPENDENCIA ECONÓMICA de los padres frente al hijo fallecido; así se indicó en comunicado del 30 de mayo de 2017 (fls. 103-104 del archivo PDF 001), veamos:

Con relación a su solicitud, nos permitimos informar que dicho análisis en el caso concreto fue desfavorable, toda vez que se presentaron inconsistencias en la información aportada por los padres del afiliado respecto a los ingresos del hogar, pues afirman que el señor Antonio De Jesús Restrepo Vélez al momento del fallecimiento del afiliado no laboraba y tampoco aportaba a los gastos del hogar, pero los vecinos entrevistados informan lo contrario, pues afirman que el señor Antonio tenía un negocio o taller en el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín de su propiedad, en el cual laboraba y los ingresos que este le generaba siempre cubrió los gastos del hogar, por lo que sus hijos Aldemar y Mario León le colaboraban con los gastos, pero era él quien siempre se encargó de pagar los gastos, por lo que el apoyo económico que pudiera haber suministrado el afiliado a sus padres se considera como una colaboración económica prestada por un buen hijo de familia.

Bajo la reflexión descrita, es necesario colegir la ausencia de dependencia económica y por ende, carencia de la calidad de beneficiario de los señores Antonio De Jesús Restrepo Vélez y Sonia Molina De Restrepo como padres del afiliado

De otro lado, y al interior de este proceso judicial, la prueba recaudada tendiente a la demostración del requisito de la dependencia económica frente al hijo fallecido, se circunscribió a la testimonial compuesta por la declaración de los señores ALDEMAR ANTONIO RESTREPO MOLINA (hermano del causante e hijo de los demandantes) y NESSY DORIETH CANO MEJÍA (novia del causante), quienes le relataron al despacho lo siguiente:

El señor ALDEMAR ANTONIO RESTREPO MOLINA, manifestó que su hermano MARIO LEÓN murió a principios en octubre de 2007, producto de un atraco; para ese momento rondaba los 52 o 53 años de edad, era soltero, y laboraba como conductor de la Alcaldía de Medellín, desde hacía 12 años aproximadamente, vivía en la casa de los padres junto con el testigo, en un inmueble (casa) ubicado en el barrio Campo Amor de Medellín.

Reveló el declarante que sus padres procrearon 4 hijos, pero para la fecha del insuceso (6 de octubre de 2007), las hermanas mujeres (Adriana y Astrid) vivían aparte; la primera se encontraba residenciada en los Estados Unidos, y la segunda convivía por temporadas con un compañero permanente

que tenía, y ninguna de ellas colaboraba con el sostenimiento económico de los demandantes, quienes ya eran adultos mayores para esa época pues el señor ANTONIO JESÚS RESTREPO contaba con 77 años de edad, y la señora SONIA MOLINA con 74 años de edad.

Afirmó que los gastos del hogar al que pertenecían ambos padres eran asumidos por los hijos hombres, y en mayor medida por el afiliado fallecido, pues era este quien percibía un mejor salario; con estos recursos se encargaba de sufragar los gastos de alimentación y servicios públicos, mientras que el testigo ALDEMAR RESTREPO MOLINA cubría los impuestos del inmueble, y los medicamentos que la EPS no les suministrara a sus padres.

Dejó en claro que el señor ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ no trabajaba para la fecha en que falleció el causante, pues 2 o 3 años atrás del insuceso, había cerrado el taller de mecánica que tenía en el aeropuerto y devuelto el local a la Aerocivil, y, a partir de ese momento, los hijos hombres asumieron todos los gastos económicos del hogar.

Manifestó que, luego de ocurrido el fallecimiento de su hermano MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA, la situación económica del hogar se desmejoró, y que, al quedar el testigo con toda la obligación, le tocó laborar horas extras, y también decidieron arrendar la casa de sus padres ubicada en el barrio Campo Amor de Medellín, e irse toda la familiar a vivir en un inmueble arrendado, a un sector y estrato socio-económico más asequible.

Le relató al despacho que su hermano MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA, dejó algunas deudas de tarjetas de crédito al momento del fallecimiento.

Por su parte, la testigo **NESSY DORIETH CANO MEJÍA**, dijo conocer a la familia RESTREPO MOLINA, pues fue la novia del afiliado fallecido MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA, relación sentimental que, según la declarante, tuvo una duración de 5 o 6 años aproximadamente, y finalizó por la muerte del señor Mario León.

Que el afiliado vivía con sus padres y otro hermano en el barrio Campo Amor de Medellín, y era conductor del Municipio de Medellín, destinando parte de su salario para sufragar los gastos de alimentación, vestido, y gastos extras que surgieran en el hogar.

Y que si bien no recuerda a cuánto ascendía el salario del causante, sí tiene claro que su monto era superior, al que percibía el otro hermano.

Relató que en varias oportunidades acompañó al causante a pagar créditos que la señora Sonia (madre) tenía en varios almacenes de ropa y calzado, que ésta frecuentaba en la terminal del sur, y que también se enteró que el afiliado era usuario de tarjetas de crédito, a veces se la prestaba al mejor amigo de nombre “Juan”.

Que el papá de Mario fue mecánico de aviones, y toda la vida tuvo un taller donde se dedicó al oficio, pero que, para la fecha en que murió Mario, ya no se encontraba laborando.

Que las otras hermanas del causante no colaboraban con los gastos del hogar, y, luego del fallecimiento, al hermano de nombre Aldemar le tocó asumir la totalidad de los gastos, debió trabajar horas extras y nocturno.

Que ella visitaba la casa de Mario cada 15 o 20 días, pues siempre vivían retirados, tenían muchos planes juntos, mismos que se vieron truncados con su fallecimiento, aun continua en contacto con la familia de Mario, y supo que debieron mudarse al municipio de sabaneta para ahorrar en gastos.

También se practicó el interrogatorio de parte al demandante ANTONIO DE JESÚS RESTREPO VÉLEZ, quien manifestó contar con 93 años de edad, vive con su esposa Sonia y su hijo Aldemar en el Municipio de Sabaneta – Ant.

No recibe pensión, y que, por tanto, él como su esposa, dependen económicamente de su hijo ALDEMAR quien ya se encuentra jubilado.

Manifestó que el causante para el momento en que falleció, convivía con ellos en casa propia ubicada en el barrio Campo Amor de Medellín, y laboraba para el Municipio de Medellín, aunque no supo precisar a cuánto ascendía su salario.

El demandante también aseguró haber laborado en el aeropuerto como mecánico de aviones, que el otro hijo de nombre ALDEMAR también laboraba en el Municipio de Medellín, y que las hijas mujeres solo se dedicaban a sus estudios; que, por ello, los gastos del hogar solamente eran sufragados por los dos hijos hombres (Mario León y Aldemar).

No recuerda con qué monto colaboraba el uno o el otro, pero Mario León se encargaba de la alimentación y los servicios y Aldemar de los gastos de impuestos del inmueble.

Pues bien, el examen conjunto de la prueba bajo las reglas de la sana crítica y la experiencia, dan cuenta que el núcleo familiar al que pertenecía el causante MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA era una familia compuesta por ambos progenitores (ANTONIO DE JESÚS RESTREPO VÉLEZ y SONIA MOLINA DE RESTREPO) y un hermano (ALDEMAR RESTREPO MOLINA), y los padres no ejercían actividad u oficio o percibían una pensión para esa fecha, por lo que se encontraban sujetos al aporte y sostenimiento económico proveído por los hijos hombres, quienes eran hombres solteros, sin hijos, que aún vivían con sus padres, y se ganaban la vida como conductores del Municipio de Medellín.

También quedó demostrado en el plenario que los aquí demandantes son adultos mayores, pues la señora SONIA MOLINA DE RESTREPO cuenta con 89 años de edad y el señor ANTONIO DE JESÚS RESTREPO VÉLEZ cuenta con 93 años de edad en la actualidad, y, para el momento en que falleció el causante, contaban con 72 y 77 años de edad respectivamente, es decir, ya eran personas de la tercera edad para aquella época.

Y al no estar demostrado que ambos demandantes, tuvieran un ingreso o pensión para aquella época (octubre de 2007), es apenas lógico que dependieran económicamente de sus hijos hombres, quienes vivían en el

mismo hogar, y tenía una vinculación formal de la que percibían un salario permanente.

Y es que, de la prueba documental obrante en el plenario, concretamente el formato de “SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONÓMICA”, radicado en el mes de noviembre de 2007, es claro que los aquí demandantes diligenciaron el ítem de “ocupación” identificándose como “ama de casa”, y “desempleado”, según se aprecia a folios 77 del archivo PDF 001.

[illegible]

Y si bien el señor ANTONIO DE JESÚS RESTREPO VÉLEZ se dedicó toda la vida a laborar como mecánico de aviación, y llegó a tener alquilado un taller en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín para ejercer tal oficio, el cual era ampliamente conocido por sus vecinos, amigos y familiares, ello no significaba que, a la edad de 77 años, aun continuara ejercido tal oficio, y mucho menos quedó acreditado que percibía ingresos por tal actividad, que le permitiesen solventar sus gastos personales y los de su conyugue SONIA RESTREPO DE MOLINA.

Al debate judicial, no se hicieron comparecer los vecinos del señor ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ, entrevistados por la AFP

PROTECCIÓN S.A., a los que supuestamente les constaba que el actor laboraba y sostenía el hogar para el mes de octubre de 2007, carga probatoria que recaía en la parte demandada, en los términos del art. 167 del Código General del Proceso, quien no logró desvirtuar la subordinación económica de los padres respecto al afiliado fallecido.

Tampoco observa la Sala contradicción entre los testigos, u ocultamientos de información por parte de demandante ANTONIO DE JESÚS RESTREPO VÉLEZ respecto a sus hijas mujeres.

Por el contrario, ambos testigos, coincidieron en que el causante era usuario del sistema financiero, más concretamente de las tarjetas de crédito, y también tomada créditos comerciales en almacenes de ropa y calzado, para favorecer a su señora madre, como lo relató la señora NESSY DORIETH CANO MEJÍA.

Frente al ocultamiento de información respecto a la otra hija de los demandantes de nombre Adriana, considera la Sala, que no se trata en realidad de ningún ocultamiento como lo afirma el recurrente, y mucho menos que tenga relevancia en al asunto debatido, pues, aunque sea cierto que la referida hija fue relacionada en la solicitud pensional como aquellos hijos que aun integraban el núcleo familiar para el mes de octubre de 2007,

De cada uno de los hijos del solicitante dar la siguiente información:					
Nombre	Edad	Ocupación-Empresa	Estado Civil	Teléfono	Vive bajo el mismo techo?
Asistido de la Guaya	48	6 ^a Dep. ECUV.	viuda		NO (Partes)
Poliana del S.	47	Vecedora.	soltero		si
Poliana del S.	49	conductor	soltero		si

Esto no significa necesariamente, que dicha hija hiciere un aporte económico para el sostenimiento de los demandantes, pues tal circunstancia no se encuentra acreditada en el juicio; por ello, su eventual permanencia definitiva o intermitente en la casa de sus padres para el mes de octubre de 2007, solo implicaba un gasto adicional para el causante y el señor ALDEMAR RESTREPO MOLINA, quienes asumían los gastos económicos del hogar, entre los cuales el más relevante era indudablemente la manutención y sostenimiento de los aquí demandante, quienes, al ser personas de la tercera edad, y

marginados del sistema pensional, requerían de gastos especiales, por lo que debe concluirse que los aportes de ese hijo fallecido sí eran determinantes e indispensables para lograr la congrua subsistencia de los padres, como efectivamente ocurrió en el presente asunto, pues básicamente la alimentación y los servicios públicos del núcleo familiar dependía de los ingresos de la afiliado fallecido, para el mes de octubre de 2007, pues los ingresos del otro hermano (Aldemar Restrepo Molina) eran insuficientes para que ambos padres tuvieran una vida en condiciones dignas.

En sentir de la Sala, valorada en su conjunto la totalidad de la prueba arimada a las diligencias, se encontró que los aquí demandantes sí cumplieron con su carga de probar la dependencia económica frente a su hijo MARIO LEÓN RESTREPO MOLINA al momento de su muerte, esto es, aquel sometimiento o sujeción de ambos padres al auxilio recibido de su hijo fallecido, de tal manera que, no obtenerlo, ponía en peligro su congrua subsistencia, motivos por los cuales SE CONFIRMARÁ la sentencia venida en apelación, por encontrarse ajusta a la realidad fáctica y probatoria de la litis.

Excepción de prescripción y compensación

Debe recordarse que el juez de primer grado, decidió declarar parcialmente probada la excepción de prescripción en relación con las mesadas pensionales que se causaron con anterioridad al 30 de abril de 2014, esto es, tres años atrás de la fecha de la segunda reclamación pensional, que data del 30 de abril de 2017.

No obstante, el apoderado judicial de la AFP PROTECCION S.A. dispone que dicho término prescriptivo se encuentra mal computado, pues la prescripción solo puede interrumpirse una sola vez, y si transcurridos 3 años desde esa interrupción no se presenta la acción judicial, la interrupción pierde su efecto, y opera nuevamente la prescripción extintiva de las obligaciones por el simple trascurso del tiempo.

Al respecto, estima la Sala que resulta cierta la apreciación que realiza e recurrente, en cuanto a que el término prescriptivo solo puede interrumpirse

por una sola vez, pues así lo señalan expresamente los arts. 489 del CST y 151 del CPTSS, disposiciones jurídicas según las cuales “...*El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente...*”

Por lo que la segunda reclamación pensional realizada en el año 2017, no interrumpió nuevamente el término prescriptivo, pues en esta reclamación no se alegaron hechos nuevos, y tampoco se observan nuevos beneficiarios; por lo tanto, la prescripción siguió surtiendo sus efectos, hasta la fecha en que se presentó la demanda ordinaria laboral que, como bien se sabe, lo fue el día 20 de junio de 2018, según se aprecia a folios 11 del archivo PDF 001.

Y será este el punto de partida para contabilizar el término trienal de prescripción al que aluden los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, lo que implica que las mesadas causadas con anterioridad al 20 de junio de 2015, se encuentran afectadas por la prescripción extintiva, debiéndose modificar en tal sentido la sentencia de primer grado, y por ende recalcular el retroactivo pensional adeudado a los señores SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ, actualizado hasta el 30 de noviembre de 2023, en razón de 14 mesadas anuales.

AÑO	MESADA	# DE MESADAS	SUBTOTAL
2015	\$ 644.350,00	8,33	\$ 5.367.435,50
2016	\$ 689.454,00	14	\$ 9.652.356,00
2017	\$ 737.717,00	14	\$ 10.328.038,00
2018	\$ 781.242,00	14	\$ 10.937.388,00
2019	\$ 828.116,00	14	\$ 11.593.624,00
2020	\$ 877.803,00	14	\$ 12.289.242,00
2021	\$ 908.526,00	14	\$ 12.719.364,00
2022	\$ 1.000.000,00	14	\$ 14.000.000,00
2023	\$ 1.160.000,00	13	\$ 15.080.000,00
			\$ 101.967.447,50

Para un total a pagar por este concepto de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

SIETE PESOS M/L (\$101.967.447), que se dividirá en partes iguales a favor de los demandantes.

A partir del 1° de diciembre de 2023, la AFP accionada deberá continuar pagando a los demandantes una mesada pensional en cuantía mínima en razón del 50% para cada uno de ellos, y con derecho a un eventual acrecimiento.

En relación a la EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN, la Sala no hará ningún pronunciamiento o modificación frente a esta condena, pues en realidad no se ordenó una suma dineraria en concreto que deba ser objeto de compensación; por el contrario, lo dispuesto en la sentencia de primera no fue otra cosa diferente a la de autorizar a la AFP PROTECCIÓN S.A., para descontar lo ya pagado a los demandantes por concepto de devolución de saldos debidamente indexado, es decir, se dejó abierta la cifra a compensar, para que los valores pagados a los demandantes se actualicen hasta el momento de aplicarse la compensación correspondiente, lo cual no representa ninguna agravio para el fondo de pensiones, y, por ello, se confirmará lo resuelto en este sentido.

Intereses moratorios.

Finamente en relación con la pretensión consecuencial de los intereses moratorios, del artículo 141 de la ley 100 de 1993, estima esta corporación que los mismos sí están llamados a prosperar en el sub lite, dado que el motivo por el cual se negó la prestación económica de sobrevivientes a los demandantes fue producto de una indebida valoración probatoria por parte de la AFP accionada y un incorrecto entendimiento del concepto de la dependencia económica de los padres respecto al hijo fallecido, con el agravante que los beneficiarios eran dos adultos mayores para la fecha de fallecimiento del afiliado, pues superaban 74 años (la madre) y 77 años (el padre), se encontraban relegados de la vida laboral y productiva, estaban desamparados en materia pensional, pues la señora Sonia Molina siempre fue ama de casa, y el señor Antonio Jesús Restrepo siempre fue independiente y no logró consolidar una pensión de vejez, lo que los supedita a la dependencia

económica de sus hijos, en mayor medida del afiliado fallecido MARIO LEÓN RETREPO MOLINA.

Así las cosas, al haberse presentado una mora injustificada en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y haberse causado esta pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993, la AFP accionada deberá ser condenada a los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional adeudado; no obstante, los referidos intereses deberán ser liquidados por la AFP PROTECCION S.A. a partir del 1° de julio de 2017, día siguiente al vencimiento del plazo de 2 meses con el que contaba la entidad accionada para proceder con el reconocimiento pensional, según lo dispuesto en el art. 1° de la Ley 717 de 2001, a tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago, como bien lo indicó el funcionario judicial de primer grado. Lo anterior, si se tiene en cuenta que la segunda solicitud pensional se realizó el 30 de abril de 2017, como lo declaró el Juez de primer grado, y respecto de la primera, ya se encontraba cerrado el ciclo con el reconocimiento de la devolución de saldos.

No existiendo más aspectos de la sentencia de primera instancia que deban ser conocidos en apelación y consulta, la misma será modificada en lo relativo a la excepción de prescripción, el retroactivo pensional y los intereses moratorios, confirmando en todo lo demás.

Costas procesales en segunda instancia

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la prosperidad parcial del recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., no habrá lugar a imponer costas procesales en esta instancia, según lo dispuesto en el numeral 5° del art. 365 del Código General del Proceso.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia objeto de apelación de fecha 21 de septiembre de 2023 proferida por el JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en cuanto a lo resuelto frente a la excepción de prescripción y el valor del retroactivo pensional adeudado a los señores SONIA MOLINA DE RESTREPO y ANTONIO JESÚS RESTREPO VÉLEZ, declarando que la prescripción parcial de mesadas pensionales, surtió efectos frente a las causadas con anterioridad al 20 de junio de 2015, y que el retroactivo pensional causado entre esta fecha y el 30 de noviembre de 2023 asciende a la suma de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L (\$101.967.447), que se dividirá en partes iguales a favor de los demandantes.

A partir del 1° de diciembre de 2023, la AFP accionada deberá continuar pagando a los demandantes una mesada pensional en cuantía mínima en razón del 50% para cada uno de ellos, y con derecho a un eventual acrecimiento.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia objeto de apelación de fecha 21 de septiembre de 2023 proferida por el JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en cuanto al extremo inicial para liquidar los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales deberán calcularse a partir del 1° de julio de 2017, a tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago, según lo expuesto en precedencia.

TERCERO CONFIRMAR en lo demás la sentencia objeto de apelación de origen y fecha conocidos, según lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

QUINTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

SEXTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA